

# LA EDUCACIÓN, EN EL BARRO DE LAS DISCUSIONES POLÍTICAS

Mariano De Vedia

Abogado y periodista

En los años '90, el gobierno de Carlos Menem encontró una fórmula para erradicar las “escuelas rancho”. Ante las dificultades para avanzar en la construcción de nuevas aulas y edificios y la insuficiencia de los planes compensatorios, el Ministerio de Educación modificó la normativa que definía a esos establecimientos precarios y limitó su aplicación a aquellos que se encontraban alejados de los centros urbanos. Así mejoró las estadísticas, pero no la realidad. Con un espíritu similar, en la provincia de Buenos Aires se dispuso ahora que los estudiantes secundarios sean evaluados con calificación numérica sólo una vez que terminen las clases. Tendrán la nota –de 7 a 10– cuando aprueben la materia. Mientras no lo hagan, se dejará constancia en el boletín de que la evaluación está en proceso. Una fórmula que seguramente hará reducir en las estadísticas los índices de aplazos y de alumnos repitientes.

Muchos, sin embargo, lo consideran un avance, ya que durante 2020 y 2021, a raíz de la pandemia del COVID-19, rigió la evaluación conceptual, por lo que toda serie estadística basada en el seguimiento de los rendimientos de los alumnos, en una etapa crítica como la actual, quedó interrumpida. Hoy los 1,6 millones de estudiantes secundarios bonaerenses pueden tener una “trayectoria educativa avanzada, en proceso o discontinua”, según el porcentaje de contenidos acreditados. En otros tiempos se hablaba de que el estudiante “alcanzó o no alcanzó los objetivos”. Modalidades, en fin, que impiden establecer parámetros comunes con otras jurisdicciones del país, lo que diluye cualquier mirada comparativa con otras realidades escolares.

Se trata de medidas que no se corresponden con las urgencias que nacen de las estadísticas oficiales. Los resultados de las pruebas de calidad de la enseñanza, desde los operativos nacionales de evaluación de los años '90 hasta las pruebas internacionales PISA y Aprender del siglo XXI reproducen las marcadas diferencias entre las provincias y no tienden a reducir las desigualdades.

Entre los déficits por corregir, hay botones de muestra. En Mendoza, el 22% de los alumnos de cuarto grado y el 32% de los de primer año mostraron en un estudio

reciente un “nivel crítico de fluidez lectora”, aún cuando en esa provincia hubo bastante educación presencial durante la pandemia.

Un llamado de atención fue el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019, con el que un laboratorio de la Unesco midió, antes de la emergencia sanitaria, las competencias en lectura, matemática y ciencia de chicos de sexto y tercer grado de 16 países. La Argentina retrocedió en la clasificación regional y en muchas de las evaluaciones registró rendimientos inferiores a las pruebas de 2013. Y algo más preocupante: el 87% de los alumnos de sexto grado tuvieron en matemática resultados por debajo del nivel mínimo de competencias exigidos para esa edad.

Lejos de quedar preservada como un área propicia para acordar políticas de Estado, en los últimos años la educación en la Argentina bajó al barro de la pelea política cuerpo a cuerpo. Las disputas ocupan el primer plano y tanto el Gobierno como la oposición intentan presentar como un éxito los modelos de los distritos que gestionan, pero basados más en los desaciertos ajenos que en los méritos propios.

De los 12 millones de alumnos que hay en todo el país, 120 mil repiten por año en la primaria y unos 340 mil en el secundario. El 89% de ellos concurren a escuelas estatales. Casi 500 mil chicos que se frustran, a los que habrá que sumar los que abandonan, un flagelo que habría llegado al millón de alumnos durante la pandemia, según algunas estimaciones. A tal punto preocupa este éxodo que el propio Ministerio de Educación de la Nación lanzó el programa “Volvé a la escuela”. Se destinan \$5000 millones para recuperar a chicos que el Estado no supo retener durante la emergencia sanitaria. Incluso en la primaria, que desde hace varios años tiene una cobertura casi completa, se estima que el 1% –unos 50 mil chicos– nunca ingresó o la abandonó.

Las provincias con tasas más altas de repitencia en el secundario son Santa Cruz (16,1%), La Pampa (15,3%) y Río Negro (15,2%).



### DISCUSIONES ETERNAS

Mientras el Gobierno y la oposición discutían durante largos meses si se debía volver a la presencialidad, miles de alumnos se desconectaron de las aulas. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que apenas el 29,8% de los alumnos participó en 2020 de clases remotas por plataformas virtuales (Zoom, Teams o Classroom).

El programa Conectar Igualdad –una función *delivery* del Ministerio de Educación– distribuyó 540 mil notebooks en 2021 y prevé repartir un millón de equipos este año, aunque eso no implica que automáticamente los chicos reciban conocimientos y aprendizajes. Históricamente, el desarrollo de la educación en el país se caracterizó por la calidad y la autoridad de los docentes y el liderazgo que asumían en las aulas, al margen de los programas de provisión de útiles, libros y alimentos.

Un rasgo de preocupación fue la aparición del fantasma de la “manipulación ideológica y adoctrinamiento”, a través del enojo y la intemperancia de una profesora de Historia en una escuela media de La Matanza, cuyas imágenes llenaron las redes sociales y los espacios de canales de noticias. Una militancia de esta envergadura

conduce al pensamiento crítico a la extinción y no hace más que ridiculizar la misión del docente, cuya autoridad se desdibuja con semejante nivel de exhibicionismo político.

Más allá del deterioro, el descontento con las gestiones políticas en educación se refleja en las cifras. En los últimos 20 años, la matrícula de los colegios privados creció 38%, a la vez que en las escuelas estatales las inscripciones cayeron 6%. Estos datos son síntomas de problemas que el sistema educativo se empeña en no resolver y que marcan la profundidad de una crisis que viene de arrastre, pero que se ha profundizado en los últimos años. Muchos especialistas coinciden en que la complejidad de los planteos y diagnósticos tornan, a su vez, más difíciles los caminos para encontrar posibles soluciones.

### CALIDAD Y TIEMPO DE CLASES

Al margen del sistema de calificaciones, sólo el 54% de los estudiantes termina el secundario, que es obligatorio desde la sanción de la ley de educación nacional en 2006. Han pasado 16 años, más de una camada escolar completa desde que rige esa normativa, y el tiempo de permanencia y egreso de los alumnos de enseñanza media sigue en deuda. Según cifras oficiales, cada año

unos 85 mil estudiantes terminan de cursar la enseñanza media, pero dejan materias pendientes y no se reciben.

En agosto del año pasado, la empresa Toyota Argentina fue noticia pero no por alguna innovación tecnológica o una fuerte inversión en el mercado automotor. Su presidente, Daniel Herrero, reveló los problemas que presenta la búsqueda de empleados para 200 puestos de trabajo, orientados a “planes a futuro” en su planta de Zárate, a raíz de la deficiente preparación de los egresados del secundario.

Hay consenso entre especialistas de distintas corrientes en educación en que el moderado aumento de la cantidad de chicos que concurren a las aulas no tuvo correlación con una mejora en los índices de rendimiento y calidad de la enseñanza. Tampoco se logró que creciera la proporción de chicos que terminan el secundario. Falló, en ese sentido, la predicción de que se alcanzarían los objetivos por el solo hecho de sancionar leyes, como la que buscó garantizar el dictado de 180 días de clase (2003), la que creó el fondo de financiamiento educativo (2005) y la ley de educación nacional (2006), que reemplazó a la ley federal de 1993.

No en todo el país se cumplen los 180 días efectivos de clases previstos por la ley 25.864. Si bien formalmente el calendario escolar de cada jurisdicción prevé esa cantidad, los paros docentes, el ausentismo y la realización de jornadas institucionales para capacitación de maestros, profesores y directivos conspira contra esa meta.

Descontados los días perdidos por las jornadas pedagógicas, las provincias de Tierra del Fuego, Chaco y San Luis no llegan a ese mínimo, advirtió el Observatorio Argentinos por la Educación. La recomendación por extender la cifra a 190 días sólo fue incorporada por los calendarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Neuquén.

Al margen de la cantidad de días, los especialistas en educación consideran escaso el tiempo dedicado al aprendizaje y miran con buenos ojos las experiencias

de apoyo escolar que ofrecen varias organizaciones del tercer sector. Apenas el 13,6% de los 4,8 millones de chicos de escuelas primarias concurren a establecimientos de jornada extendida o completa, pese a que la ley nacional de educación recomendó ampliar la jornada en el aula. Es decir que 4,1 millones reciben apenas cuatro horas de clases por día. Una exposición al conocimiento bastante limitada, dado que suman unos 720 horas a lo largo del año en la escuela, muy por detrás de Costa Rica (1188), Dinamarca (1051), Chile (1039), Australia (866), Israel (959), Inglaterra (942), Holanda (930), Canadá (920), y Francia (900), según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

### INCENTIVOS Y OTRAS PROPUESTAS

En una reciente investigación, los autores Juan J. Llach y Mauricio Grotz recomiendan profundizar “los incentivos en las instituciones y en los ministerios”, dado que el crecimiento de las inversiones en educación –principalmente asignadas a los salarios docentes– mostró una influencia muy limitada en los resultados educativos.

Llach vuelve con la idea de promover “escuelas ricas para los pobres”, para lo cual afirma que “las poblaciones más necesitadas deben tener prioridad en las políticas educativas”. Ambos investigadores perciben que el camino es llevar a los docentes con “mayor experiencia y calificaciones” a esas comunidades e invitan a generar cambios en la carrera docente y en los institutos de formación.

Otras propuestas apuntan a acelerar el acceso a las salas de 3 y 4 años en la educación inicial, con una articulación intensa entre los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud. En la educación básica hay espacios para fortalecer los aprendizajes de idiomas, tecnología y educación ambiental, además de promover en todas las instancias la educación en el pensamiento crítico, para lo cual el mejor camino sería predicar con el ejemplo. 